



Seguridad Económica en La Guajira: el rol de las Fuerzas Militares en el Desarrollo Productivo

Mayor (Ejército) Marvin Antonio Nasrala Álvarez

Artículo para optar al título profesional:

Maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos Armados

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”
Bogotá D.C., Colombia
2025

DATOS GENERALES	
Nombre del estudiante	: Mayor (Ejército) Marvin Antonio Nasrala Álvarez
Identificación	: 1032390166
Programa académico	: Maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos Armados
Tutor metodológico	: Mauricio Torres Guarnizo
Tutor temático	: Leonardo Miguel Hernández González
Fecha de entrega	: 8 de Agosto de 2025
Extensión	: 8524 palabras

DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD Y CESIÓN DE DERECHOS

El autor declara que este artículo fue escrito de acuerdo con la normatividad de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” (ESDEG) y no existe ningún potencial conflicto de interés relacionado con este. Las posturas y aseveraciones presentadas son resultado de un ejercicio académico e investigativo que no representan la posición oficial ni institucional de la ESDEG, las Fuerzas Militares de Colombia o el Ministerio de Defensa Nacional.

Este artículo es enteramente mi propio trabajo y no ha sido presentado para la obtención de un título en esta u otra Institución de Educación Superior. Se han referenciado todos los trabajos y puntos de vista de otros autores, así como los datos de otras fuentes utilizadas. No se emplearon herramientas de generación de contenido por Inteligencia Artificial para su elaboración.

El autor acepta ceder los derechos de publicación en favor de la ESDEG y su Sello Editorial de acuerdo con los términos de la licencia Creative Commons: [Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas](#).

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN

El autor autoriza que este artículo sea publicado por el Sello Editorial ESDEG en su repositorio institucional y esté disponible bajo una modalidad de [acceso abierto](#).

Seguridad Económica en La Guajira: el rol de las Fuerzas Militares en el Desarrollo Productivo

Economic Security in La Guajira: The Role of the Military Forces in Productive Development

Marvin Antonio Nasrala Álvarez¹

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Resumen:

El artículo estudia la seguridad económica en zonas de transición afectadas por conflictos armados como en La Guajira donde existen problemas estructurales como la pobreza extrema, el escaso acceso a servicios básicos y economías ilegales. La investigación destaca el papel de las Fuerzas Militares desde una estrategia integral que apoya el desarrollo económico. Estas acciones garantizan la seguridad física y promueven la construcción de infraestructura, el apoyo logístico y la implementación de proyectos productivos, lo cual ha sido clave para la reincorporación de excombatientes y la integración de comunidades en economías sostenibles. Así, se explora la interdependencia entre la seguridad económica y la seguridad humana, concluyendo que un entorno seguro y el acceso a oportunidades superan la pobreza y violencia. No obstante, este enfoque enfrenta desafíos como inseguridad, falta de financiamiento, pobreza y corrupción. Con esto, se busca una perspectiva que combine seguridad, economía y respeto por los DDHH.

Palabras Claves: Seguridad económica, Seguridad humana, Derechos humanos, Reconstrucción, Economías ilegales, Proyectos productivos, Corrupción.

Abstract:

The article studies economic security in transition zones affected by armed conflict, such as La Guajira, where there are structural problems such as extreme poverty, poor access to basic services and illegal economies. The research highlights the role of the Armed Forces from an integral strategy that supports economic development. These actions guarantee physical security

and promote the construction of infrastructure, logistical support and the implementation of productive projects, which has been key to the reincorporation of ex-combatants and the integration of communities into sustainable economies. Thus, the interdependence between economic security and human security is explored, concluding that a safe environment and access to opportunities overcome poverty and violence. However, this approach faces challenges such as insecurity, lack of financing, poverty and corruption. So, it seeks a perspective that combines security, economics and respect for human rights is sought.

Keywords: Economic security, Human security, Human rights, Reconstruction, Illegal economies, Illegal economies, Corruption

Introducción

En las últimas décadas, el enfoque de seguridad ha experimentado una metamorfosis sustancial en el ámbito internacional, pasando de una visión centrada exclusivamente en la defensa del Estado frente a amenazas externas hacia una comprensión más amplia que incorpora las múltiples dimensiones que afectan a las personas. Esta perspectiva, conocida como seguridad humana, fue impulsada por organismos multilaterales como las Naciones Unidas y como lo expone el diplomático Annan, K (2000), en tal sentido reconoce que amenazas como la pobreza, exclusión social, inseguridad alimentaria, corrupción o el acceso limitado a servicios básicos pueden ser tan devastadoras para la vida humana como un conflicto armado.

En este marco, la seguridad económica se ha establecido como uno de los ejes de la seguridad humana, entendida como “la capacidad de personas y comunidades para satisfacer sus necesidades básicas de manera sostenida y digna, accediendo a oportunidades que garanticen condiciones de vida estables, justas y libres de amenazas estructurales” (Sen, 1999; Pogge, 2002). Esta dimensión trasciende el mero acceso a ingresos e incluye también el acceso a medios de vida, recursos productivos, servicios esenciales como salud y educación, y la libertad para tomar decisiones económicas sin estar condicionados por la pobreza o marginalización.

En contextos marcados por los hechos violentos y el conflicto armado, como ocurre en diversas regiones colombianas, la relación entre seguridad económica y seguridad humana se vuelve estrecha. Colombia ha enfrentado durante más de medio siglo un conflicto interno que ha dejado profundas huellas sociales, económicas e institucionales. La firma del Acuerdo de Paz entre

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

el Estado y el grupo insurgente denominado “*Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo*” (FARC-EP) en 2016 abrió un nuevo escenario de transición, en el que uno de los principales desafíos ha sido transformar las condiciones estructurales que dieron lugar al conflicto.

Una de las regiones más críticas es el departamento de La Guajira, ubicado al norte del país, caracterizado por la alta presencia de comunidades indígenas, especialmente el pueblo Wayuu, donde las estadísticas reflejan niveles alarmantes de pobreza extrema, carencia de servicios básicos y arraigo de economías ilegales como el contrabando y el narcotráfico. Esto ha contribuido a perpetuar un ciclo de pobreza, inseguridad, exclusión, corrupción y violencia estructural. En este contexto, la seguridad económica no solo es un derecho pendiente, sino también una estrategia clave para proteger el respeto de los derechos humanos y fortalecer la presencia legítima del Estado.

En este entorno de transición y reconstrucción, las Fuerzas Militares de Colombia han desempeñado un rol que va más allá de las funciones convencionales de defensa y orden público. A través de programas como "Fe en Colombia", el Ejército Nacional ha impulsado proyectos productivos en territorios vulnerables, especialmente en los 18 resguardos indígenas distribuidos en los municipios de Uribia, San Juan, Maicao, Riohacha, Barrancas entre otros, articulando acciones de seguridad con iniciativas de desarrollo rural, generación de ingresos y fortalecimiento del tejido social. Este tipo de intervenciones plantea una nueva forma de participación institucional en zonas influidas por el conflicto, donde las Fuerzas Militares se convierten en actores de desarrollo y no solo en agentes de control Militar y Policial.

Según Sikkink (2011), señala que, para avanzar en procesos de justicia transicional y reconstrucción, es indispensable que las instituciones de seguridad se transformen en promotoras activas de los derechos humanos y del desarrollo sostenible. En línea con esta visión, los proyectos productivos impulsados por las Fuerzas Militares en La Guajira buscan promover alternativas económicas legales, fortalecer las capacidades comunitarias y facilitar la reincorporación de excombatientes y la participación de jóvenes en riesgo. Sin embargo, estas intervenciones enfrentan diversos desafíos como la falta de continuidad, la débil articulación con políticas públicas, la desconfianza histórica de algunas comunidades y los riesgos asociados a la militarización del desarrollo.

Desde una perspectiva analítica, se examinará con mayor profundidad la influencia real de estas iniciativas en la seguridad económica de las comunidades locales. Debido a lo anterior, se presenta la siguiente pregunta:

¿Cómo contribuyen las Fuerzas Militares al desarrollo de proyectos productivos en zonas de transición, específicamente en La Guajira, para garantizar la seguridad económica, la estabilidad de las comunidades y la protección de los derechos humanos?

Para responder, se ha establecido como objetivo general analizar el rol de las Fuerzas Militares como actores estratégicos en el desarrollo de proyectos productivos que fortalezcan la seguridad económica en zonas de transición en el departamento de La Guajira, garantizando el respeto y la promoción de los derechos humanos. La investigación se centrará en tres aspectos: (1) establecer la relación entre seguridad económica y seguridad humana en el contexto colombiano respecto a las intervenciones militares; (2) identificar los principales aportes y desafíos de las Fuerzas Militares en la implementación de proyectos productivos en zonas de transición en el departamento de La Guajira; y (3) analizar la influencia de los proyectos productivos promovidos por las Fuerzas Militares en la mejora de la seguridad económica de las comunidades en zonas de transición en el departamento de La Guajira.

Este trabajo es indispensable para las Fuerzas Militares puesto que investiga sobre la mejora de las actividades encaminadas a la seguridad del territorio y protección de los recursos a través de acciones militares, tácticas, estrategias, y la creación de lazos y cooperación con la comunidad y con los planes, programas y proyectos económicos del país. Además, el escrito profundiza en el seguimiento y concientización de los Derechos Humanos y la dignidad humana dentro de las acciones del Ejército Nacional, lo que resulta necesario para contener actividades ilícitas, migraciones, grupos armados y delincuenciales, como también para crear espacios de inversión, comercio, salubridad, educación y una atmósfera de confianza entre la población y las instituciones del Estado. Con esto, el estudio innova los enfoques de seguridad al tener en cuenta factores y actores complejos, interconectados y multipolares, y aporta al conocimiento que se genere futuramente en los estudios de desarrollo social, estrategia militar y Derechos Humanos.

Metodología

El diseño metodológico implementado fue un enfoque cualitativo. La investigación se centró en la consolidación de información cualitativa, que consistió en el análisis y observaciones de datos no numéricos y artículos. Este enfoque es ideal para comprender los procesos de desarrollo económico y social en regiones postconflicto como en el departamento de La Guajira, ya que permite conocer de manera profunda las experiencias y perspectivas de los actores involucrados. A través de entrevistas semiestructuradas a grupos focales, se logrará una visión más clara sobre los desafíos y logros de los proyectos productivos impulsados por las Fuerzas Militares como pilares de la seguridad humana y de los Derechos Humanos.

El enfoque cualitativo tiene como objetivo examinar el impacto de las Fuerzas Militares en el desarrollo económico y la estabilidad social de La Guajira. Para ello, se considerarán diferentes puntos de vista de miembros de las comunidades, líderes locales y expertos en desarrollo, lo que permitirá contextualizar las iniciativas y comprender mejor su efectividad. Este enfoque flexible se adapta a situaciones cambiantes, lo que facilita ajustar la investigación según sea necesario y profundizar en las dimensiones sociales, económicas y políticas involucradas.

Además, se analizarán los efectos de estos proyectos en su contexto social, con el fin de ofrecer una comprensión detallada que explora tanto los significados como los contextos en los que se desarrollan. Se evaluarán aspectos como los proyectos productivos, la inclusión social y los derechos humanos para determinar cómo estos procesos contribuyen a la edificación de paz y a la recuperación de las comunidades afectadas. En resumen, esta investigación tiene un enfoque descriptivo que oferta detalladamente los factores que influyen en el éxito o las dificultades de estos proyectos en zonas de transición como La Guajira.

Seguridad económica y seguridad humana en Colombia: una mirada crítica desde La Guajira

La conexión entre la seguridad económica y la seguridad humana ha generado un creciente interés investigativo, particularmente en áreas como en la región del departamento de La Guajira, donde la pobreza extrema y la violencia estructural crean un ambiente de incertidumbre generalizada. Este análisis intenta descifrar la relación entre los dos conceptos a través de las propuestas esenciales en la literatura académica que nos permiten comprender que la seguridad económica para la seguridad humana en un contexto contribuye a la vulnerabilidad y la alineación social.

Para empezar, se remonta al origen del concepto de seguridad humana, el cual yace en 1994 por medio del Informe Anual de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) donde se expone el cambio a un nuevo paradigma de seguridad (PNUD, 1994). Desde entonces se ha adoptado el concepto de “seguridad humana”, el cual encaja más con la llegada de la globalización finalizando la Guerra Fría.

La seguridad humana y la seguridad económica son conceptos claves que permiten comprender las dinámicas de desarrollo y el bienestar social de las comunidades, particularmente en situaciones de vulnerabilidad y marginalidad. A lo largo de las últimas décadas, los conceptos tradicionales de seguridad han evolucionado. La visión de seguridad, antes centrada exclusivamente en la defensa frente a amenazas externas, se ha expandido para abarcar aspectos más cercanos a la vida cotidiana de las personas, como la pobreza, el escaso acceso a servicios y la desigualdad. Este cambio teórico ha sido fundamental para enfrentar las problemáticas que afectan a las regiones marcadas por el conflicto armado, la violencia y la exclusión social. En este marco, la seguridad humana y la seguridad económica se presentan como elementos interdependientes que afectan no solo el desarrollo de las personas, sino también la estabilidad de la población en general, por lo cual se hace necesario analizar el siguiente concepto.

El concepto de “seguridad humana” está conmutado con la “vulnerabilidad mutua”. Es decir, en un sistema conectado globalmente, la sostenibilidad está condicionada por los miembros más débiles. Mientras permea inseguridad extrema en las zonas con condiciones de vulnerabilidad, todas las partes estarán expuestas. Con ello, el objetivo de la seguridad humana debería ser la reducción del riesgo colectivo (Nef, 1999).

A pesar de que teóricos como Jorge Nef (1999) y Amartya Sen (1999) han desarrollado sus obras en contextos históricos y perspectivas enfocadas en las regiones más vulnerables del mundo, es oportuno cuestionar los términos de “centro y periferia” y “países desarrollados y subdesarrollados”, ya que estos marcos conceptuales resultan inadecuados para explicar las complejas dinámicas globales actuales. De acuerdo con Nef, el "centro" se compone por los sectores fuertes en cualquier región, que son los principales beneficiarios del desarrollo y la modernidad. Sin embargo, las realidades de las periferias son más multidimensionales y no pueden reducirse solo a una división entre el centro y la periferia, ni a las diferencias entre países desarrollados y subdesarrollados.

Desde la perspectiva de teóricos como Nef, Sen, Johan Galtung, Edward Said, Saskia Sassen, David Harvey y Ulrich Beck, la seguridad humana se interpreta como el resultado de la interacción entre diversos objetivos estratégicos que enriquecen y amplían su comprensión, especialmente en contextos marcados por la desigualdad y la vulnerabilidad. Aunque cada autor ofrece un enfoque particular, todos manifiestan en la necesidad de implementar una visión integral que no solo contemple el acceso a recursos básicos para una vida digna y estable, sino también las estructuras sociales, políticas y económicas que reproducen situaciones de riesgo y exclusión.

En primer lugar, Galtung (1969), en su texto *Violence, Peace, and Peace Research* manifiesta en que las estructuras económicas, sociales y políticas perpetúan la pobreza, la exclusión, la desigualdad y las injusticias, diferencia la violencia estructural y la violencia directa, argumentando que las formas de violencia más profundas no siempre son visibles, pero son igualmente destructivas, perpetuando desigualdades y vulnerabilidades. En concreto, Amartya Sen reformula el desarrollo al decir que no se entiende solo como un aumento en la economía, sino como el crecimiento de las libertades personales, resaltando la relevancia de ofrecer igualdad de oportunidades para lograr una vida plena y digna.

Por su parte, Edward Said y Saskia Sassen impugnan las representaciones distorsionadas de las periferias en la globalización y el imperialismo, mientras que David Harvey y Ulrich Beck detallan cómo la globalización y los riesgos globales, como el cambio climático o los conflictos armados internos y externos, afectan a la población más vulnerable de manera irrazonable. En este orden de ideas, la interrelación entre estos enfoques resalta que la seguridad humana no puede ser interpretada sin tener en cuenta las interdependencias globales y las injusticias estructurales que producen y conservan la exclusión.

La seguridad humana ha surgido como una herramienta fundamental para analizar las relaciones de poder que estructuran el mundo y promover una transformación hacia una sociedad más equitativa y justa. Esta propone una visión en la que la seguridad de todas las personas se vincula estrechamente con la reducción de las desigualdades, una distribución justa de los recursos y el respeto a la dignidad humana.

En este marco, la seguridad humana trasciende la mera ausencia de violencia o pobreza, al abordar de forma integral las condiciones sociales, económicas y políticas que perpetúan la

vulnerabilidad y la exclusión de amplios sectores de la población mundial. Este enfoque fomenta una concepción más amplia de la seguridad, donde la justicia social y la equidad son pilares esenciales para alcanzar una paz duradera y un desarrollo verdaderamente inclusivo. Así, la seguridad humana abarca múltiples dimensiones económica, alimentaria, sanitaria, personal, ambiental y política profundamente interrelacionadas. Una amenaza en cualquiera de estos ámbitos puede afectar negativamente a los demás, reforzando ciclos de exclusión y fragilidad social.

La seguridad económica es una de las dimensiones clave de la seguridad humana. Esta no solo alega a la ausencia de pobreza, sino a la capacidad de las personas para acceder a los recursos necesarios que les permitan satisfacer necesidades y bienestar. Desde este enfoque, la seguridad económica abarca el acceso a bienes materiales como vivienda, servicios públicos, y a las oportunidades que permiten el ejercicio pleno de desarrollar las capacidades humanas, tal como lo propone Amartya Sen (1999) en su concepto de desarrollo como libertad de su obra *Desarrollo como libertad* (1999). Es decir que, para Sen, "la pobreza no se limita solo a la falta de ingresos, sino a la carencia de capacidades que permitan llevar una vida digna, libre de privaciones y con un acceso amplio a oportunidades".

La seguridad económica abarca diferentes aspectos: desde el acceso a recursos esenciales como alimentos, agua potable, salud y educación, hasta el aprovechamiento de oportunidades que permitan alcanzar el máximo potencial. Sen (1999) amplió la idea de desarrollo al señalar que no se debe ver solo como un aumento de ingresos, sino como la expansión de las libertades reales de los individuos. Esto implican que deben estar disponibles los recursos para que las personas puedan ejercer sus derechos. Este enfoque conecta de manera estrecha la seguridad económica con la posibilidad de que las personas vivan de acuerdo con sus valores y metas personales.

En el texto de *Seguridad y Defensa II* se manifiesta que:

“La seguridad económica en Colombia está estrechamente vinculada al desarrollo social. Factores como la pobreza, el desempleo y la falta de infraestructura impactan directamente la seguridad y el bienestar de las personas. Los autores proponen políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones económicas en las regiones más afectadas por la violencia, con el objetivo

de fomentar un entorno más seguro y estable para las comunidades” (Cerón Rincón & Cortés Castillo, 2021, P. 60-64).

También, el concepto de seguridad económica está profundamente relacionado con las políticas de desarrollo inclusivo y justicia social. Según Joseph Stiglitz (2002), las políticas neoliberales y la globalización han intensificado las desigualdades económicas, concentrando la riqueza en manos de unas pocas élites, mientras que amplios sectores de la población, particularmente los más vulnerables, siguen atrapados en la pobreza y la exclusión. Stiglitz sostiene que la verdadera seguridad económica solo se alcanzará a través de políticas públicas que promuevan una redistribución justa de los recursos, favorezcan la justicia social y garanticen un acceso equitativo a los servicios esenciales. En ausencia de políticas que prioricen la equidad, la seguridad económica seguirá siendo inalcanzable para muchas comunidades marginadas.

Con respecto al departamento de la Guajira, la seguridad económica es una necesidad urgente. Las comunidades indígenas Wayuu enfrentan altos índices de pobreza, falta de servicios básicos y una creciente exclusión social. Esta realidad genera un ciclo constante de marginación y vulnerabilidad, lo que obstaculiza su desarrollo y origina tensiones en la región. La escasez de oportunidades y el acceso limitado a recursos esenciales no solo afecta su bienestar económico, sino que también debilita su capacidad para alcanzar una seguridad humana integral. Así, la falta de seguridad económica se convierte en un factor decisivo que alimenta la violencia estructural y la exclusión, como lo ha señalado Joseph Stiglitz en sus estudios sobre globalización y desigualdad.

La seguridad humana abarca más que la protección frente a la violencia, extendiéndose a elementos esenciales como salud, educación y alimentación. Aunque las intervenciones militares pueden ofrecer ciertos niveles de protección, también generan tensiones y pueden amenazar los modos de vida tradicionales. Este escenario resalta el reto de equilibrar la seguridad respetando la autodeterminación y los derechos fundamentales de las comunidades.

La relación entre seguridad humana y económica es crucial para comprender los desafíos del desarrollo y el bienestar. En muchos casos, contar con una base económica sólida es fundamental para garantizar condiciones de vida dignas y libres de amenazas. Como plantea Amartya Sen (1999), el desarrollo debe entenderse como un proceso que amplía las libertades

individuales, lo que requiere acceso efectivo a recursos y oportunidades, el cual es posible solo mediante una seguridad económica adecuada.

Por otro lado, los desafíos financieros pueden afectar profundamente la estabilidad humana. La carencia de bienes básicos crea entornos de exclusión, elevando el riesgo de violencia y facilitando el ingreso de actores ilegales en las comunidades. En contextos de violencia estructural, como el de La Guajira, donde prevalecen economías ilícitas como el narcotráfico y el contrabando, estas condiciones perpetúan la marginalización y dificultan el progreso colectivo. Un entorno económico y social inestable puede empujar a las personas hacia soluciones desesperadas, como la inserción en actividades informales o ilegales, agravando las tensiones sociales. En La Guajira, estos factores están estrechamente ligados al accionar de grupos armados, lo que complica aún más el acceso a una vida digna y segura.

La gobernanza también es clave en esta relación. Un sistema democrático y transparente debe garantizar la distribución justa de los recursos y la eficacia de las políticas públicas en provecho de los sectores más necesitados. Según Stiglitz (2002), una gestión eficiente es esencial para salvaguardar los derechos políticos, económicos y sociales para evitar estructuras organizadas de exclusión y corrupción que reproducen la desigualdad. En La Guajira, la debilidad institucional y la corrupción han limitado el alcance de las políticas públicas. Para lograr un desarrollo inclusivo, se necesita una gobernanza participativa y eficaz. Las políticas sociales deben enfocarse en garantizar servicios esenciales y fomentar oportunidades económicas sostenibles, incorporando además criterios de resiliencia ante futuras crisis.

Transformación institucional

En los últimos años, el conflicto armado en Colombia ha llevado a situaciones difíciles con cambios significativos, creando dinámicas políticas, sociales y territoriales complejas como resultado. En este entorno, las Fuerzas Armadas de Colombia han decidido ampliar sus funciones tradicionales con un enfoque social, asumiendo responsabilidades en procesos de desarrollo, consolidación territorial y escenarios de estabilización postconflicto. Particularmente, han participado en proyectos en zonas de transición como las fronterizas, apartadas y de difícil acceso.

Con esto, se adquiere especial relevancia en un momento histórico en el que el concepto de seguridad ha sido ampliado para incorporar dimensiones humanas, sociales y económicas,

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

conforme a los lineamientos estratégicos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 1994). Con base en este modelo la seguridad trasciende en la acción estratégica del Estado, orientándose hacia la dignidad de la población civil, lo que exige una revisión analítica sobre el papel de los actores armados.

Así, el rol de las Fuerzas Militares en Colombia ha evolucionado. Como señala Vega Díaz (2019), la emergencia de “nuevas amenazas” tales como el narcotráfico, los Grupos Armados Organizados (GAO) y el terrorismo transnacional ha forzado una redefinición de la doctrina de defensa. En consecuencia, las Fuerzas Militares han adoptado un enfoque más integral, incorporando principios internacionales como el de seguridad humana en su proceder institucional.

Este proceso de transformación lo ha llevado a generar condiciones idóneas para la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de estabilización que incluyen proyectos productivos y sociales, especialmente en La Guajira. Sin embargo, este método no es reciente: durante la Guerra Fría, el Plan Lazo (1962–1964), promovido por el Ejército Nacional, ya combinaba operaciones militares con iniciativas de infraestructura y servicios como estrategia para ganar legitimidad en zonas rurales. No obstante, como advierte Restrepo Galeano (2023), tales intervenciones fueron objeto de fuertes críticas debido al uso inadecuado de la fuerza que generó múltiples violaciones de derechos humanos, lo que pone en evidencia los riesgos asociados a la militarización de la acción social sin una supervisión efectiva.

En las zonas de transición, como El Tambo (Cauca), donde el Estado busca consolidar su presencia tras la firma de acuerdos de paz o el repliegue de actores armados ilegales, las Fuerzas Militares han estado en el impulso de proyectos productivos orientados a fomentar el desarrollo económico, la seguridad alimentaria y la confianza institucional. Según Kilcullen (2009), estas estrategias responden a un criterio contemporáneo de contrainsurgencia, en la que se busca “ganar los corazones y las mentes” de la población mediante la combinación de seguridad y bienestar. En Colombia, esto se ha manifestado en el marco de políticas públicas como la consolidación territorial y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

No obstante, la intervención de las Fuerzas Militares en estos procesos debe ser analizada con cautela. Si bien pueden aportar capacidades logísticas y condiciones de seguridad, no deben sustituir a las instituciones de gobierno ni ignorar los marcos normativos en materia de derechos humanos. Como sostiene Pérez Luño (1994), los derechos humanos constituyen exigencias éticas y jurídicas que deben limitar toda acción estatal, incluso en contextos de excepción o transición.

Uno de los principales desafíos radica en el riesgo de militarización del desarrollo rural. Cordero (2015) advierte que cuando las intervenciones sociales y productivas son lideradas por estructuras militares, tienden a reproducirse relaciones jerárquicas y autoritarias que restringen la participación autónoma de las comunidades. Este tipo de prácticas puede profundizar dinámicas de exclusión y vulneración, especialmente en poblaciones históricamente afectadas por el conflicto armado.

A ello se suma la persistente desconfianza hacia las Fuerzas Armadas en varias regiones del país. Los abusos a los derechos humanos y la ausencia de procesos efectivos de reparación han dejado cicatrices profundas en la memoria de los colombianos. En este sentido, la justicia transicional, como plantea Teitel (2000), exige que el gobierno adopte una postura reparadora y transformadora, que reconozca las afectaciones históricas y promueva garantías de no repetición.

Otro desafío sustantivo se relaciona con la complejidad del entorno criminal contemporáneo. Cerón Rincón y Cortés Castillo (2021) sostienen que el narcotráfico en América Latina no puede ser entendido únicamente como un fenómeno económico, sino también como una estructura cultural y simbólica. Desde este punto de vista, los proyectos productivos destinados a sustituir economías ilícitas deben atender a las identidades, valores y experiencias construidas en torno al crimen organizado, evitando enfoques meramente técnicos.

La intervención de las Fuerzas Militares de Colombia en proyectos productivos dentro de zonas de transición representa una transformación significativa en el vínculo entre seguridad y avance social. Si bien han contribuido a extender la presencia del Estado en territorios históricamente marginados.

Retomando las experiencias del pasado, como el Plan Lazo, y los desafíos actuales del siglo XXI, donde se han desarrollado amenazas transnacionales (que incluyen el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional), que presionan para establecer una doctrina militar orientada en la protección integral de la comunidad, respetando los Derechos Humanos (DIDH) y el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Por tal motivo, resulta fundamental que las acciones militares estén articuladas con la institucionalidad.

En este contexto, y desde una perspectiva analítica sectorial, se desarrollaron testimonios no publicados para conocer, de primera mano, los aportes y desafíos que las Fuerzas Militares han implementado en la organización y ejecución de proyectos productivos.

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

Por ejemplo, Franz S, (2025, junio 14), en el municipio de Uribia, dice que más que dificultades o tensiones, el contar con el apoyo de las Fuerzas Militares genera una relación de confianza. La cercanía entre la población y la fuerza pública es lo que ayuda a generar nuevos proyectos económicos a pesar de las crisis que se han vivido, y más teniendo en cuenta que La Guajira es un departamento de frontera con Venezuela el cual lleva padeciendo su crisis económica y migratoria aguda y fuerte desde hace décadas. Más bien, lo ideal sería que hubiera más pie de fuerza en el departamento para fortalecer esa relación y sinergia que se ha creado con los años, lo que ha permitido tranquilidad a la población.

De manera similar, Salom Mendoza, D. (2025, junio 15), destaca que en Maicao se ha experimentado una mayor seguridad y tranquilidad, lo que permite a los habitantes trabajar y desarrollar sus actividades sin temor a la violencia, al robo de cultivos, al desplazamiento o a la presión de actores armados ilegales. Además, el acompañamiento del Ejército ha permitido que desarrollen mejor su liderazgo a través de una organización del grupo de trabajo, con horarios más constantes, división de tareas y cumplimiento de metas. En muchos casos, los militares han ofrecido talleres y capacitaciones en liderazgo. Gracias al apoyo logístico del Ejército Nacional con vehículos, maquinaria y acompañamiento se ha logrado transportar materiales e insumos, así como productos al mercado, mejorando sus ingresos.

Asimismo, Marvin, N (2025, junio 15) manifiesta que, en regiones como San Juan, la implicación activa de las Fuerzas Militares en proyectos productivos rurales ha contribuido a una evolución social, tanto en las comunidades como en los equipos que colaboran con ellas. Esta cooperación ha favorecido un clima de mayor confianza, seguridad, integración y compromiso compartido, aspectos fundamentales para avanzar hacia un desarrollo más equitativo y sostenible.

Por su parte, Montaña, J. E. (2025, junio 17) expresa que las empresas como El Cerrejón han generado empleos para las personas de nuestra comunidad, también lograron un desarrollo de las autoridades locales, regionales y nacionales tendientes a brindar seguridad a las operaciones realizadas por las empresas, con ello traen seguridad, progreso a nuestra comunidad y los ojos de otros empresarios quieren invertir en el departamento de La Guajira.

Con base en los testimonios recolectados de las experiencias pasadas mencionados anteriormente, se concluye que la presencia del Ejército Nacional de Colombia en los territorios ha fomentado mejoras en las condiciones de los campesinos e indígenas, especialmente en la explotación de los recursos relacionados con la industria agrícola y ganadera, con resultados

positivos en el desarrollo de estas actividades económicas. Esto se debe a la minimización de los fenómenos de violencia como hurtos y otros delitos que afectan notablemente los derechos humanos y el bienestar de los ciudadanos, y de las comunidades indígenas; hoy, debido a la presencia y trabajo constante de las Fuerzas Militares, se garantiza la protección, la cual se manifiesta en la tranquilidad de la comunidad residente.

Más allá del uniforme militar: los proyectos productivos en la seguridad económica en zonas de transición

Salazar-Manrique y Zapata-Villamil (2020) argumentan que el impacto social se refiere a los efectos que se crean tras la puesta en marcha de un programa o proyecto en una comunidad, los cuales pueden variar según el contexto y el grupo social (Liberta, 2007; Burge & Vanclay, 1995). Desde esta perspectiva, este apartado busca comprender dicho impacto desde la mirada de los soldados, cuyas percepciones se moldean a partir de sus experiencias tanto en la tropa, donde se les inculcan valores, como la disciplina, responsabilidad, compañerismo, lealtad y el honor que se forman intensamente en el área de operaciones, donde interactúan directamente con la población. Dichas percepciones se forman a partir de la interacción entre sus sensaciones y procesos cognitivos, influenciadas por el entorno y las normas institucionales militares (Rodaway, 1994; Goffman, 2001; Moskos, 2002).

En el contexto específico de la transición posconflicto en el departamento de La Guajira, especialmente en el pueblo indígena *Wayyu*, la articulación entre seguridad y reconstrucción del tejido social se constituye en un eje estratégico para garantizar la sostenibilidad regional. En este sentido, las Fuerzas Militares de Colombia han ocupado un papel novedoso que trasciende sus funciones tradicionales de defensa y control del orden público, involucrándose en procesos civiles como la promoción y acompañamiento de proyectos productivos. Esta evolución funcional cobra especial relevancia en La Guajira, una región históricamente afectada por la violencia, el narcotráfico y el abandono estatal, debido a su difícil acceso y su ubicación fronteriza con Venezuela.

Un caso representativo de lo anterior se encuentra en las zonas habitadas por el pueblo Wayuu. Allí, el Ejército Nacional realiza acciones orientadas a mejorar las condiciones socioeconómicas y a consolidar una seguridad integral, entendida como el ejercicio legítimo del control territorial en armonía con los derechos humanos y el bienestar de las comunidades.

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

Desde una perspectiva teórica, la propuesta de seguridad humana de Amartya Sen (1999) resulta pertinente para analizar este tipo de actuaciones, ya que prioriza la protección de las personas por encima de enfoques centrados exclusivamente en la seguridad del Estado. De este modo, la paz sostenible depende de garantizar condiciones de vida dignas y acceso a oportunidades.

No obstante, estos procesos deben desarrollarse en un marco normativo argumentado en los Derechos Humanos (DH) y el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Por lo tanto, resulta importante resaltar que “el desarrollo legítimo debe basarse en la dignidad humana y el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, incluyendo la autodeterminación y la consulta previa” (Cançado Trindade, 2003). Por consiguiente, frente a las herramientas internacionales, así como el Convenio 169 de la OIT, Protocolo II adicional de los Convenios de Ginebra (1977) y la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) y obligan a respetar el derecho a la consulta previa, frente a cualquier proyecto o intervención que repercuta en los territorios étnicos.

En retrospectiva histórica, desde el año 1962, Colombia puso en marcha su primera estrategia contrainsurgente llamada Plan Lazo, durante el gobierno de Guillermo León Valencia. Esta fue una iniciativa integral liderada por las Fuerzas Militares, que buscaba no solo combatir a los grupos armados ilegales, sino también impulsar el desarrollo en las zonas rurales.

Durante el mandato del conservador y diplomático Guillermo León Valencia (1962–1966), presidente del Frente Nacional, se implementó un modelo de pacificación que apostó por una respuesta militar. A través de operaciones armadas dirigidas contra los asentamientos comunistas de Marquetalia, El Pato, Guayabero y Riochiquito, el Estado buscó desmantelar lo que denominaba "repúblicas independientes" o territorios considerados fuera del control institucional. Estas acciones marcaron el inicio de una etapa distinta en el conflicto armado en Colombia.

En este contexto, se desarrolló el Plan Lazo: una estrategia que combinaba el uso de la fuerza con intervenciones sociales. El plan contemplaba obras de infraestructura, mejoras en servicios de salud y educación, con la meta de mejorar las condiciones de la población rural. Al mismo tiempo, buscaba debilitar el respaldo popular a la insurgencia mediante la presencia del Estado no solo con militares, sino también con programas de desarrollo. Esta fórmula intentó ofrecer una solución integral, aunque muchas veces se vio limitada por la prioridad dada a las acciones armadas frente a las sociales.

Dicho enfoque permitió llevar la institucionalidad e implementar la acción integral, la cual evolucionó orientándose hacia la estabilización de territorios estratégicos mediante intervenciones coordinadas entre las Fuerzas Militares y el gobierno.

Actualmente, en La Guajira, estas estrategias se han materializado en proyectos productivos con comunidades Wayuu, enfocados en actividades como la apicultura, la pesca artesanal, la agricultura comunitaria, la puesta en marcha de parques eólicos y la producción textil. Más recientemente, se han impulsado iniciativas para fortalecer sistemas agroforestales resilientes a la sequía, el manejo sostenible de cuencas hidrográficas y la implementación de energías renovables en comunidades aisladas. Cabe destacar que estos proyectos han sido desarrollados en colaboración con entidades del gobierno especialmente con la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y la Gobernación de La Guajira.

Por consiguiente, estos proyectos no solo buscan mejorar las condiciones de vida, sino también generar vínculos positivos entre el Estado y poblaciones históricamente excluidas. Sin embargo, los resultados han sido diversos. Estudios como los de Herrera y Álvarez (2020) afirman que la falta de comprensión profunda de la cosmovisión, las estructuras sociales y las dinámicas territoriales del pueblo Wayuu ha generado tensiones y resistencias. Por ende, la imposición de modelos externos sin procesos de concertación puede reproducir lógicas verticales que debilitan la autonomía comunitaria.

En este contexto, los impactos de estas iniciativas pueden agruparse en tres dimensiones interrelacionadas. En primer lugar, el desarrollo económico-productivo, donde algunas comunidades han visto un aumento en sus ingresos gracias a proyectos productivos implementados por diferentes actores, que incluyen actividades como la pesca, la apicultura y la producción artesanal. Estos logros alcanzan mayor sostenibilidad cuando se acompañan de formación técnica, acceso a mercados y apoyo institucional continuo. Asimismo, la incorporación de técnicas agroecológicas y tecnologías renovables, como la energía solar, ayuda a pequeños productores a adaptarse a condiciones ambientales adversas.

En segundo lugar, el desarrollo socio-comunitario se refleja en el fortalecimiento y la participación de la comunidad, el fortalecimiento de redes de cooperación y una mejora en la percepción de seguridad. No obstante, la falta de consulta previa con las comunidades puede generar conflictos internos que limitan la efectividad de estas intervenciones.

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

Por último, la dimensión político-institucional destaca la importancia del apoyo entre las fuerzas del gobierno y otras entidades descentralizadas para restaurar la legitimidad estatal en territorios afectados por la presencia de actores ilegales. Particularmente, en áreas con comunidades indígenas, esta legitimidad está condicionada al respeto de sus jurisdicciones especiales y derechos colectivos.

A pesar a los avances alcanzados, se mantienen importantes desafíos en la región. La participación de las Fuerzas Militares en funciones civiles genera cuestionamientos sobre la separación de poderes en un Estado democrático. Además, la ausencia de una perspectiva intercultural puede provocar desconfianza e incluso rechazo, especialmente cuando no se respetan los mecanismos de participación reconocidos internacionalmente. Como advierte James C. Scott (1998), “intentar ver como un Estado, sin comprender las prácticas locales, puede conducir al fracaso al imponer soluciones técnicas sin diálogo ni adaptación cultural”.

En este sentido, se analizó tanto el contexto local y regional, como las estrategias implementadas al establecer los programas reales, evidenciando su influencia. A través del análisis de la información realizadas en La Guajira revelan que el acompañamiento militar ha tenido un efecto significativo en el fortalecimiento de la seguridad económica del territorio.

Sin embargo, en este escenario territorial, particularmente se ha caracterizado por el aumento del crimen organizado, los conflictos territoriales y la crisis migratoria proveniente de Venezuela, la presencia del Ejército Nacional ha funcionado como un garante clave para el impulso del desarrollo de la economía local a través de proyectos productivos, especialmente en zonas vulnerables como Maicao, San Juan, Uribia y Riohacha.

El acompañamiento de las Fuerzas Militares ha permitido que comunidades, empresarios y emprendedores desarrollen sus actividades con mayor tranquilidad, mitigando riesgos como la extorsión, el contrabando y la presencia de grupos armados al margen de la ley. En particular, el fortalecimiento del régimen especial aduanero en la zona fronteriza y del puerto seco de Maicao ha sido posible, en parte, gracias al respaldo de las Fuerzas Armadas, que aseguran las condiciones mínimas de orden y estabilidad necesarias para el comercio legal y el tránsito de bienes.

De esta manera, la acción militar ha trascendido su rol defensivo, contribuyendo indirectamente a la económica, el empleo y el fortalecimiento de la conectividad vial, consolidándose como un actor facilitador de nuevos proyectos productivos e inversión local.

Contrario a lo que ocurre en otros contextos, en La Guajira no se han identificado tensiones significativas entre la comunidad y las Fuerzas Militares durante la ejecución de los proyectos. Por el contrario, se ha consolidado un clima de cercanía y confianza mutua que ha permitido impulsar nuevas iniciativas económicas y sociales, facilitando el acceso de comunidades antes excluidas a oportunidades de desarrollo con respaldo estatal. En este sentido, la percepción positiva de la Fuerza Pública como garante de bienestar y estabilidad ha sido especialmente significativa en zonas donde antes predominaba la desconfianza hacia el Estado.

Asimismo, la presencia de empresas multinacionales, principalmente del sector minero, también ha tenido un impacto relevante en la seguridad económica del departamento. Estas compañías, mediante el pago de impuestos y regalías, financian proyectos de infraestructura vial, educativa y de salud. Igualmente, generan empleo directo e indirecto, beneficiando a las familias locales e impulsando la economía regional. Sin embargo, su impacto debe analizarse con cautela, ya que la mejora de condiciones de vida no es homogénea. Por tanto, es fundamental que sus contribuciones se realicen dentro de un marco de responsabilidad social empresarial, en articulación con las necesidades y prioridades de las comunidades indígenas, como el pueblo Wayuu.

Por ende, aunque el balance general del acompañamiento militar es percibido como positivo en términos de estabilidad y dinamismo económico, la sostenibilidad del desarrollo en La Guajira, y especialmente para el pueblo Wayuu, no puede depender exclusivamente de la intervención militar ni de actores privados, por lo cual se hace necesario que sean autosostenibles a través de la implementación de proyectos productivos liderados por la comunidad.

Conclusiones

El papel que hoy desempeñan las Fuerzas Militares en Colombia, especialmente en territorios como La Guajira, refleja una transformación profunda en la manera como el Estado concibe la seguridad, el desarrollo y su relación con las comunidades. Lejos de limitarse al ejercicio del poder armado, hoy las Fuerzas Militares se ven inmersas en procesos que buscan sembrar confianza, estabilidad y esperanza en regiones que durante décadas han sido violentadas y empobrecidas, lo que ha hecho crecer la desconfianza hacia las Fuerzas Armadas por abusos a los Derechos Humanos y la ausencia de procesos efectivos de reparación.

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

La seguridad, entendida antes como defensa ante amenazas externas o internas, ya no es suficiente. La experiencia del conflicto armado colombiano, ejemplificado en el Plan Lazo (1962) en Marquetalia, El Pato, Guayabero y Riochiquito, ha enseñado que la verdadera paz no llega solo cuando se contienen los fusiles porque las intervenciones militares en zonas pueden crear relaciones de poder, vulneraciones a los derechos humanos, y poca participación de las comunidades en los proyectos económicos, sino cuando se transforman las condiciones estructurales que originaron la violencia como el hambre, la exclusión, la desigualdad, y el olvido estatal a través del respeto a la dignidad humana y la generación de un ambiente propicio para la actividad económica.

Autores como Nef (1999), Sen (1999) y Galtung (1969), entre otros, manifiestan la necesidad de implementar un enfoque que contemple la seguridad no sólo como la ausencia de violencia, sino también el acceso a recursos básicos y el desarrollo las estructuras sociales, políticas y económicas, evitando situaciones de riesgo y exclusión. Además, la ausencia de oportunidades hace que las comunidades recurran a economías ilícitas como narcotráfico y contrabando. Desde esta perspectiva, la seguridad económica se convierte en un componente esencial de la seguridad humana porque sin ingresos dignos, sin acceso a agua potable, salud, educación o participación real, ninguna comunidad puede vivir tranquila ni soñar con un futuro mejor.

En este contexto, los proyectos productivos impulsados por las Fuerzas Militares en La Guajira representan una apuesta por acercar el Estado a la gente, por construir puentes entre instituciones y comunidades, por demostrar que el uniforme también puede ser símbolo de servicio, solidaridad y reconstrucción. A través de programas como Fé en Colombia, el Ejército Nacional ha colaborado con entidades públicas y privadas para llevar oportunidades a zonas que han vivido por años bajo la sombra del abandono y la violencia.

Estos esfuerzos han dado frutos. Por ejemplo, en las regiones de Uribia y Maicao, la presencia de las Fuerzas Militares ha creado espacios de tranquilidad y confianza en la población, quienes pueden llevar a cabo sus actividades sin temor a la violencia, al robo de cultivos, al desplazamiento o a la presión de actores armados ilegales. Lo mismo acontece en San Juan con la participación de las Fuerzas Militares en los proyectos productivos rurales, como la ayuda con el transporte, lo cual ha contribuido a una integración y compromiso compartido. Y en El Cerrejón, se han generado empleos e inversiones gracias a la creación de espacios de seguros. También, en

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

las comunidades indígenas Wayuu, se han abierto espacios de diálogo, formación productiva, fortalecimiento comunitario y generación de ingresos que desarrollan la apicultura, la pesca artesanal, la agricultura comunitaria, los parques eólicos, la producción textil, los sistemas agroforestales, el manejo sostenible de cuencas hidrográficas y la implementación de energías renovables.

Pero estos logros no deben cegar. También hay señales de alerta que no pueden ignorarse. La militarización del desarrollo, aunque con buenas intenciones, conlleva riesgos. Las Fuerzas Militares no están formadas para reemplazar a las instituciones civiles ni para liderar procesos de autonomía comunitaria o construcción cultural. Su presencia, si no está acompañada por una acción estatal integral y respetuosa de los Derechos Humanos (DH), Derecho Internacional de Conflictos Armados (DICA) y los derechos de la gente indígena, para que se lleven a cabo mesas de concertación de manera preventiva, antes de que se presenten problemas, y puede terminar generando nuevas formas de dependencia, desconfianza o exclusión.

La paz y el desarrollo no se imponen, se construyen. Para que esa construcción sea duradera, debe ser liderada por las propias comunidades. Las Fuerzas Militares pueden acompañar, facilitar, proteger, incluso inspirar, pero no sustituir la libertad de las comunidades. Es clave entender que el éxito de los proyectos productivos en zonas de transición no depende únicamente del contexto local: a nivel nacional persisten amenazas estructurales que afectan directamente la seguridad económica como grupos delictivos organizados, la corrupción institucional, el tráfico de drogas y, en el caso específico de La Guajira, la crisis migratoria en la frontera con Venezuela. En medio de este panorama, la labor del Ejército es fundamental para garantizar condiciones mínimas de seguridad y permitir que comunidades, emprendedores y empresas puedan operar sin temor a la extorsión o la violencia.

El caso de La Guajira lleva a preguntarnos: ¿qué entienden las comunidades por desarrollo? ¿qué significa seguridad para un joven Wayuu que ha visto morir a su hermana por desnutrición? ¿cómo se construye paz en un territorio donde la institucionalidad aún es débil y fragmentada? No basta con llevar proyectos; es necesario escucharlos, involucrarlos desde el inicio, respetar sus tiempos, sus saberes y decisiones.

Los desafíos siguen siendo enormes. La falta de articulación entre políticas públicas, la fragilidad institucional local, la falta de consulta previa con comunidades indígenas y la escasa perspectiva intercultural en la planificación del desarrollo son factores que pueden poner en riesgo

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

lo logrado hasta ahora. Por eso, el camino hacia una paz real y sostenible exige más que buena voluntad: requiere coherencia entre discurso y acción, respeto por las diferencias culturales, inversión sostenida en capacidades locales y, sobre todo, un compromiso firme con la justicia social.

La experiencia en La Guajira muestra que las Fuerzas Militares pueden ser aliados estratégicos en la estabilización de territorios en transición. Pero su rol debe estar claramente definido: apoyar, no reemplazar; proteger, no dirigir; construir confianza, no dependencia. Solo cuando las comunidades sean protagonistas reales de su desarrollo, cuando sus voces sean escuchadas y sus derechos respetados, será posible hablar de una paz con raíces, de una seguridad con rostro humano y de un futuro donde el Estado llegue no solo con armas, sino con dignidad, justicia y oportunidades para todos.

Referencias

- Annan, K. (2000). En una libertad más amplia: Hacia el desarrollo, la seguridad y los derechos humanos para todos. Naciones Unidas.
- Amartya Sen. (1999). Development as Freedom. Anchor Books.
- Ardila Castro, C. A., Ramírez Benítez, E., & Cubides-Cárdenas, J. (2020). El derecho internacional humanitario y su significado para las operaciones militares presentes y futuras. Revista Científica General José María Córdova, 18(32), 857-88
- Burge, P., & Vanclay, F. (1995). Social impact assessment: A contribution to the state of the art series. Impact Assessment, 13(2), 59-86.
- Cançado Trindade, A. A. (2003). Derechos humanos y derecho internacional humanitario. Editorial UNAM.
- Calderón Rojas, J. (2016). Etapas del conflicto armado en Colombia: hacia el posconflicto. Revista de Estudios Sociales, 57, 123-145.

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

Cerón Rincón, A., & Cortés Castillo, D. E. (2021). Crimen organizado transnacionales culturales en América Latina. *Revista de Estudios sobre Seguridad y Defensa*, 15(2), 123-14.

Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. (2025, junio 6). El Plan Lazo y la acción cívico-militar. <https://www.comisiondelaverdad.co/el-plan-lazo-y-la-accion-civico-militar>

Cordero, J. (2015). Militarización del desarrollo rural y sus implicaciones sociales. *Revista de Estudios Sociales*.

Franz S. (2025, junio 14). Testimonio documentado sobre los aportes y desafíos de las Fuerzas Militares en la implementación de proyectos productivos en zonas de transición en el departamento de La Guajira. Testimonio no publicado.

Goffman, E. (2001). *Asylums: Essays on the social situation of mental patients and other inmates*. Anchor Books.

Herrera, L., & Álvarez, J. (2020). Desafíos en la intervención estatal en comunidades indígenas: El caso del pueblo Wayuu en La Guajira. *Revista Colombiana de Antropología*, 56(1), 123-145.

Kilcullen, D. (2009). *The Accidental Guerrilla: Fighting Small Wars in the Midst of a Big One*. Oxford University Press.

Liberta, A. E. (2007). *Social Impact Assessment*. Cambridge University Press.

Molano Giraldo, M. F. (2015). Del conflicto al posconflicto: temores, retos y reflexiones de la solución negociada. *Revista de Estudios sobre Conflicto y Paz*, 20(2), 45-68.

Marvin, N. (2025, junio 15). Testimonio documentado sobre tensiones entre comunidades indígenas y Fuerzas Militares en zonas de transición en La Guajira. Testimonio no publicado.

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

Montaño, J. E. (2025, junio 17). Testimonio documentado sobre tensiones entre comunidades indígenas y Fuerzas Militares en zonas de transición en La Guajira. Testimonio no publicado.

Moskos, C. C. (2002). *The American military: A sociological perspective*. Routledge.

Nef, Jorge. (s. f.). Seguridad humana y vulnerabilidad mutua En: Goucha y Rojas Aravena, Seguridad humana, prevención de conflictos y paz, p. 41.

Nussbaum, M. (2011). *Crear capacidades: El enfoque del desarrollo humano*. Editorial Harvard University Press.

Pérez Luño, A. E. (1994). *Los derechos fundamentales: Estado de derecho y Constitución*

PNUD. (2004). *Informe sobre el desarrollo humano 2004: La libertad cultural en el mundo diverso de hoy*. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Pogge, T. (2002). *Pobreza mundial y derechos humanos: Responsabilidades cosmopolitas y reformas*. Polity Press.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (1994). *Informe sobre Desarrollo Humano*. Naciones Unidas.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). *Informe de Desarrollo Humano 1994. Nuevas dimensiones para la seguridad humana*. PNUD, Nueva York, 1994

Restrepo, E., & Bernal, P. (2017). *Gobernanza y desarrollo en contextos de crisis: El caso de las comunidades afectadas por el conflicto en Colombia*. Editorial Pontificia Universidad Javeriana.

Restrepo Galeano, E. (2023). *Aporte de las Fuerzas Militares de Colombia en la seguridad comunitaria*. Nombre de la revista o libro, páginas 693–714.

Rodaway, P. (1994). *Sensory practices*. Routledge.

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

- Ruiz, J. C., & Beristain, C. M. (2011). Paz y reconciliación: La reparación integral como fundamento del proceso de justicia transicional. Fondo Editorial Universidad del Rosario.
- Salom Mendoza, D. (2025, junio 15). Testimonio documentado sobre tensiones entre comunidades indígenas y Fuerzas Militares en zonas de transición en La Guajira. Testimonio no publicado.
- Salazar-Manrique, J. C., & Zapata-Villamil, C. A. (2020). Percepción de los soldados sobre el impacto social de proyectos productivos en zonas de transición posconflicto. *Revista de Estudios Militares y Sociales*, 12(3), 905-920.
- Scott, J. C. (1998). *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. Yale University Press.
- Sen, A. (1999). *Desarrollo como libertad*. Editorial Planeta. Capítulo 1.
- Sen, A. (1999). *Desarrollo como libertad*. Editorial Alfred A. Knopf.
- Sikkink, K. (2011). *La cascada de justicia: Cómo los juicios por derechos humanos están cambiando la política mundial*. Editorial W.W. Norton & Company.
- Stiglitz, J. E. (2002). *La globalización y sus descontentos*. Editorial W.W. Norton & Company.
- Villa, M., & Salazar, E. (2019). *La integración de las Fuerzas Militares en los procesos de desarrollo económico y social en zonas de conflicto: El caso de La Guajira*. Editorial Universidad Nacional de Colombia.
- Vega Díaz, L. F. (2019). El papel de las Fuerzas Armadas de Colombia frente a las nuevas amenazas a la seguridad. Páginas (292-304).